



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ**  
**ASUNTOS JURÍDICOS**

**GS-2026-**

**/ MEBOG-ASJUR-13**

Bogotá D.C.

Señor  
OMAR GIOVANNI FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ  
gionifrz@gmail.com  
Bogotá D.C.,

Asunto: respuesta a solicitud GE-2026-031973-MEBOG

Cordial saludo, en atención a las disposiciones de la Ley 1755 de 2015, y conforme a la Resolución No. 01550 del 28 de mayo del 2009, “*Por la cual se define la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Policía Metropolitana de Bogotá*”, me permito dar respuesta a la solicitud de acuerdo con nuestra competencia, así:

*“1. Se informe y explique de manera clara y motivada por qué en el oficio GS 2026-042928 se negó la certificación sobre el arma involucrada, cuando dentro de la investigación penal la Fiscalía ya ha identificado el arma incautada como pistola SIG SAUER SP 0127023, supuestamente asignada a la Estación Sexta de Policía, haciéndose entrega de la misma como elemento material probatorio al IT. Edison Alexander Aguilar González, mediante acta suscrita dentro de la actuación investigativa fechada del 19 de diciembre de 2024”.*

En atención a su solicitud, la respuesta emitida mediante el comunicado oficial GS-2026-042928-MEBOG del 27 de enero de 2026 se produjo con ocasión de la solicitud en la cual se requirió certificar si el arma de fuego con la cual se produjo el disparo que causó la muerte del joven DAVID ESTEBAN FERNÁNDEZ GUIO pertenecía a la dotación oficial de la Policía Nacional o, por el contrario, era un arma de propiedad particular o externa a la institución.

Frente a ese aspecto, se señaló que no era jurídicamente posible emitir una certificación en esos términos, por cuanto la petición implicaba establecer o confirmar circunstancias directamente relacionadas con la ocurrencia del hecho investigado, en particular la identificación del arma con la cual se habría producido el disparo que ocasionó la muerte del mencionado auxiliar de policía.

La determinación de cuál fue el arma utilizada en un hecho de esta naturaleza, así como la verificación de su eventual relación con el resultado investigado, constituye un asunto propio de la actividad investigativa y probatoria que corresponde a las autoridades judiciales competentes, en especial a la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 250 de la Constitución Política.

En ese sentido, la respuesta emitida por la Policía Metropolitana de Bogotá obedeció a que la solicitud formulada exigía certificar un aspecto que supone la definición de hechos que hacen parte del esclarecimiento del suceso investigado, lo cual excede el ámbito de las competencias de esta Institución.

Ahora bien, la información que usted refiere proveniente de la Fiscalía General de la Nación corresponde a actuaciones propias de la investigación penal, dentro de las cuales dicha autoridad puede identificar, recaudar y analizar elementos materiales probatorios, tales como armas de fuego sometidas a cadena de custodia y a estudios balísticos, estas actuaciones se desarrollan dentro del marco de las competencias constitucionales y legales de la Fiscalía, y su valoración corresponde a las autoridades judiciales.

Por lo anterior, se reitera que la respuesta previamente emitida se ajustó a las competencias legales de la institución y se ajustó al alcance de la solicitud formulada en su momento.

*“2. Se certifique si el arma de fuego tipo pistola marca SIG SAUER SP 0127023 corresponde a arma de dotación oficial de la Policía Nacional, indicando: 2.1. Número de inventario institucional 2.2. Unidad o dependencia a la cual se encontraba asignada 2.3. Funcionario responsable de su custodia o administración 2.4. Se certifique quién tenía asignada o bajo custodia dicha arma entre el 01 de agosto y el 18 de agosto de 2024, indicando nombre, grado y dependencia del funcionario responsable. 2.5 Se certifique quién fue la última persona a quien se le entregó o asignó el arma antes del fallecimiento de DAVID ESTEBAN FERNÁNDEZ GUIO”.*

En primer lugar, frente a la información relacionada con “certifique si el arma de fuego tipo pistola marca SIG SAUER SP 0127023 corresponde a arma de dotación oficial de la Policía Nacional”, “Número de inventario institucional”, “Unidad o dependencia a la cual se encontraba asignada”, “Funcionario responsable de su custodia”, “quién tenía asignada o bajo custodia” y “quién fue la última persona a quien se le entregó o asignó el arma”, es preciso indicar que dicha información, en caso de existir dentro de los registros de la institución, se encuentra amparada por reserva legal, por tratarse de datos sensibles relativos a la seguridad institucional, a la verificación de armamento oficial y a la individualización de servidores públicos, razón por la cual su divulgación podría comprometer datos de terceros, de seguridad y de registros administrativos relacionados con la identificación, asignación, custodia y trazabilidad del armamento.

Lo anterior, resulta pertinente traer a colación el reciente criterio jurisprudencial fijado por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente 25000234100020260002000 del 28 de enero de 2026, Magistrado ponente Felipe Alirio Solarte Maya, el cual analizó expresamente la naturaleza jurídica de los diferentes registros que se llevan en los libros de las unidades policiales y dispositivos tecnológicos (donde probablemente puede reposar la información que usted requiere), concluyendo que, si bien ostentan en principio carácter público, su contenido puede adquirir la condición de información público–reservada cuando involucra datos sensibles, estratégicos, de terceros o de seguridad, en los siguientes términos:

*“30. Si bien es cierto que la ley establece que el libro de población y minuta de vigilancia son documentos de naturaleza pública, lo cierto es que, estos tienen una connotación de público-reservado en consideración a que en ellos se consigna información privada como lo es, los desplazamientos efectuados por el personal policial, planes operativos y el registro de los números de identificación de las armas de dotación, entre otros. Así mismo, en estos libros se consigna información de terceras personas que podría afectar derechos personales y privados.*

*31. Por su parte, en lo concerniente a los registros de comunicación y consulta en los dispositivos asignados a la Policía Nacional, es diáfano para la Sala que, estos recopilan datos de terceros, consultados en los sistemas policiales, reportes de patrullajes, codificaciones de direcciones y reportes internos que, de compartir esta información sin una adecuada custodia, se pondría en riesgo información de terceros, tanto personal civil como de los funcionarios que hacen parte de la institución policial.*

*32. En consideración a lo expuesto, estima la Sala que, con la normatividad expuesta y los preceptos jurisprudenciales mencionados, la información requerida (...), cuenta con calidad de reserva legal establecida en la Ley (...).”*

Por tal motivo, la información requerida se encuentra sujeta a las causales de reserva previstas en la Ley 1712 de 2014, particularmente aquellas relacionadas con la protección de la seguridad pública, la seguridad de datos de los servidores públicos y la prevención de riesgos frente al uso y control del armamento institucional.

En consecuencia, la Policía Nacional no se encuentra facultada para suministrar ni certificar la información solicitada en los términos planteados, por tratarse de datos que, conforme al marco normativo y jurisprudencial vigente, tienen carácter público–reservado.

*“3. Se remitan copias de los registros administrativos de control de armamento relacionados con dicha arma, correspondientes al período 1 al 18 de agosto de 2024, incluyendo: 3.1. Libro de armería 3.2. Actas de entrega o asignación 3.3. 3.4. Registros de salida y devolución 3.5 Reportes de novedades del arma Controles de inventario del armamento de la estación”.*

En similar pronunciamiento como el realizado en la respuesta del punto 2, me permito señalar que frente a la información relacionada con *“copias de los registros administrativos de control de armamento relacionados con dicha arma”, “Número de inventario institucional”, “Unidad o dependencia a la cual se encontraba asignada”, “Libro de armería”, “Actas de entrega o asignación”, “Registros de salida y devolución” y “Reportes de novedades del arma”,* es preciso indicar que dicha información, en caso de existir dentro de los registros de la institución, se encuentra amparada por reserva legal, por tratarse de datos sensibles relativos a la seguridad institucional, a la verificación de armamento oficial y a la individualización de servidores públicos, razón por la cual su divulgación podría comprometer datos de terceros, de seguridad y de registros administrativos relacionados con la identificación, asignación, custodia y trazabilidad del armamento.

Lo anterior, resulta pertinente traer a colación el reciente criterio jurisprudencial fijado por Tribunal Administrativo de Cundinamarca, expediente 25000234100020260002000 del 28 de enero de 2026, Magistrado ponente Felipe Alirio Solarte Maya, el cual analizó expresamente la naturaleza jurídica de los diferentes registros que se llevan en los libros de las unidades policiales y dispositivos tecnológicos (donde probablemente puede reposar la información que usted requiere), concluyendo que, si bien ostentan en principio carácter público, su contenido puede adquirir la condición de información público–reservada cuando involucra datos sensibles, estratégicos, de terceros o de seguridad, en los siguientes términos:

*“30. Si bien es cierto que la ley establece que el libro de población y minuta de vigilancia son documentos de naturaleza pública, lo cierto es que, estos tienen una connotación de público-reservado en consideración a que en ellos se consigna información privada como lo es, los desplazamientos efectuados por el personal policial, planes operativos y el registro de los números de identificación de las armas de dotación, entre otros. Así mismo, en estos libros se consigna información de terceras personas que podría afectar derechos personales y privados.*

*31. Por su parte, en lo concerniente a los registros de comunicación y consulta en los dispositivos asignados a la Policía Nacional, es diáfano para la Sala que, estos recopilan datos de terceros, consultados en los sistemas policiales, reportes de patrullajes, codificaciones de direcciones y reportes internos que, de compartir esta información sin una adecuada custodia, se pondría en riesgo información de terceros, tanto personal civil como de los funcionarios que hacen parte de la institución policial.*

*32. En consideración a lo expuesto, estima la Sala que, con la normatividad expuesta y los preceptos jurisprudenciales mencionados, la información requerida (...), cuenta con calidad de reserva legal establecida en la Ley (...).”*

Por tal motivo, la información requerida se encuentra sujeta a las causales de reserva previstas en la Ley 1712 de 2014, particularmente aquellas relacionadas con la protección de la seguridad pública, la protección de datos de terceros y la prevención de riesgos frente al uso y control del armamento institucional.

En consecuencia, la Policía Nacional no se encuentra facultada para suministrar ni certificar la información solicitada en los términos planteados, por tratarse de datos que, conforme al marco normativo y jurisprudencial vigente, tienen carácter público–reservado.

*“4. Se certifique si dicha arma se encontraba registrada en el inventario del armamento de la Estación de Policía de Tunjuelito al momento de los hechos”.*

Al respecto, es preciso señalar que la pregunta parte de una premisa fáctica relacionada con la ocurrencia de determinados hechos, circunstancias cuya determinación corresponde a las autoridades competentes dentro de las actuaciones investigativas que se adelanten para el esclarecimiento de lo sucedido, en tal sentido, la Policía Nacional no se encuentra facultada para emitir certificaciones que supongan la confirmación o validación de situaciones fácticas que hacen parte del ámbito propio de las investigaciones penales.

Ahora bien, frente a información de relacionada con el inventario, registro, control y trazabilidad del armamento institucional asignado a las diferentes unidades policiales, incluyendo las estaciones de policía, forma parte de los registros administrativos y operacional de la Policía Nacional.

En dichos registros se consigna información relacionada con la identificación del armamento de dotación, números de inventario, movimientos de asignación, control y custodia del material institucional, así como datos asociados a los funcionarios responsables de su administración, razón por la cual su divulgación puede comprometer la seguridad institucional, los procedimientos internos de control del armamento y la información de terceros.

Sobre este punto, resulta pertinente reiterar el criterio jurisprudencial fijado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente 25000234100020260002000 del 28 de enero de 2026, el cual señaló que, si bien ciertos registros que se llevan en las unidades policiales tienen naturaleza pública, su contenido puede adquirir la condición de información público–reservada cuando involucra datos sensibles, estratégicos o relacionados con la identificación de armamento institucional y los movimientos operativos del personal policial.

En consecuencia, la información relacionada con el registro e inventario del armamento institucional asignado a una unidad policial específica se encuentra amparada por las causales de reserva previstas en la Ley 1712 de 2014, particularmente aquellas orientadas a proteger la seguridad pública, la seguridad de datos personales de servidores públicos y la integridad de los procedimientos institucionales de control del armamento.

Por lo anterior, la Policía Nacional no se encuentra facultada para certificar ni suministrar la información solicitada en los términos planteados, al tratarse de información que reviste carácter público–reservado conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable.

*“5. Se certifique qué funcionario era responsable del control de armamento en la Estación de Policía de Tunjuelito para la fecha de los hechos”.*

Frente a este punto, es preciso señalar que la pregunta, parte de una premisa fáctica relacionada con la ocurrencia de determinados hechos, circunstancias cuya determinación corresponde a las autoridades competentes dentro de las actuaciones investigativas que se adelanten para el esclarecimiento de lo sucedido, en tal sentido, la Policía Nacional no se encuentra facultada para emitir certificaciones que supongan la confirmación o validación de situaciones fácticas que hacen parte del ámbito propio de las investigaciones penales.

Adicionalmente, la información relacionada con la identificación de los funcionarios encargados del control, administración y custodia del armamento institucional en una unidad policial específica, así como las responsabilidades operativas asociadas a dichos roles, forma parte de los registros administrativos internos de la institución.

Sobre este punto, resulta pertinente reiterar el criterio jurisprudencial fijado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente 25000234100020260002000 del 28 de enero de 2026, el cual señaló que, si bien ciertos registros que se llevan en las unidades policiales tienen naturaleza pública, su contenido puede adquirir la condición de información público–reservada cuando involucra datos sensibles, estratégicos o relacionados con la seguridad institucional, los procedimientos operativos y la información de los funcionarios que hacen parte de la institución.

En ese sentido, la divulgación de información relacionada con la identificación de los funcionarios responsables de la administración y control del armamento institucional en una unidad policial podría comprometer los datos privados de los servidores públicos y los procedimientos internos de manejo y control del material institucional.

En consecuencia, dicha información se encuentra amparada por las causales de reserva previstas en la Ley 1712 de 2014, particularmente aquellas orientadas a proteger la seguridad pública, la seguridad de datos de los servidores públicos y la integridad de los procedimientos institucionales.

Por lo anterior, la Policía Nacional no se encuentra facultada para certificar ni suministrar la información solicitada en los términos planteados, al tratarse de información que reviste carácter público-reservado conforme al marco normativo y jurisprudencial aplicable.

*“6. Se remitan copias de los documentos que acrediten la aplicación de los protocolos institucionales aplicables al control, custodia y entrega de armas de dotación policial vigentes en agosto de 2024”.*

Frente a esta solicitud, es preciso indicar que mediante el comunicado oficial GS-2026-042928-MEBOG se informó previamente que, de acuerdo con lo reportado por la Estación de Policía Tunjuelito mediante correo electrónico nro. 003 COMAN-E6 del 24 de enero de 2026, “se certifica que durante los días 17, 18 y 19 de agosto de 2024, en la Estación de Policía Tunjuelito se aplicaron los protocolos institucionales vigentes relacionados con el ingreso, control, custodia y salida del armamento asignado al personal policial, conforme a los lineamientos establecidos por la Policía Nacional. No obstante, una vez verificados los archivos físicos y digitales disponibles en la unidad, no se encontraron actas de instrucción específicas correspondientes a las fechas señaladas”.

Debe precisarse que la información anteriormente citada correspondió a la verificación realizada respecto de las fechas específicas que fueron objeto de consulta en la solicitud anterior, en atención al alcance de dicho requerimiento.

Ahora bien, los protocolos institucionales relacionados con el control, custodia y entrega del armamento de dotación policial hacen parte de los lineamientos y procedimientos internos adoptados por la Policía Nacional para la administración y manejo del material institucional.

Así mismo, los documentos específicos mediante los cuales se registran o evidencian la aplicación de protocolos, tales como registros administrativos internos, anotaciones en libros institucionales, minutas de servicio u otros documentos de control interno, pueden contener información relacionada con la identificación del armamento institucional, aspectos operativos de la unidad policial, asignaciones y datos de los funcionarios que intervienen en dichas actuaciones.

Sobre este punto, resulta pertinente reiterar el criterio jurisprudencial fijado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente 25000234100020260002000 del 28 de enero de 2026, el cual precisó que, si bien ciertos registros que se llevan en las unidades policiales tienen naturaleza pública, su contenido puede adquirir la condición de información público-reservada cuando involucra datos sensibles, estratégicos o relacionados con la seguridad institucional, los procedimientos operativos y la información de terceros o de los funcionarios que hacen parte de la institución.

En consecuencia, los documentos que eventualmente puedan contener registros internos asociados a la aplicación de los protocolos institucionales de control y manejo de armamento se encuentran amparados por las causales de reserva previstas en la Ley 1712 de 2014, particularmente aquellas orientadas a proteger la seguridad pública, la seguridad de datos de servidores públicos y la integridad de los procedimientos institucionales.

*“7. Se certifique si existen registros o informes internos relacionados con la manipulación, entrega, devolución o novedad del arma identificada como SIG SAUER SP 0127023 durante el mes de agosto de 2024”.*

Frente a esta solicitud, es preciso señalar que la misma parte de la premisa según la cual el arma identificada como SIG SAUER SP 0127023 habría tenido alguna relación con los hechos a los que hace referencia el peticionario, circunstancia cuya determinación corresponde a las autoridades competentes dentro de las actuaciones investigativas que se adelanten para el esclarecimiento de lo sucedido.

En tal sentido, la Policía Nacional no se encuentra facultada para emitir certificaciones que impliquen confirmar o desvirtuar situaciones fácticas que hacen parte del ámbito propio de las investigaciones penales, las cuales se encuentran bajo la dirección y coordinación de la Fiscalía General de la Nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 250 de la Constitución Política.

Adicionalmente, los eventuales registros o informes internos relacionados con la manipulación, entrega, devolución, control o novedades del armamento institucional hacen parte de los sistemas y documentos administrativos internos mediante los cuales se realiza la trazabilidad, control y custodia del material de dotación policial, dichos registros, si existieran, pueden contener información relativa a la identificación del armamento institucional, asignaciones internas y datos de los funcionarios responsables.

Sobre este punto, resulta pertinente reiterar el criterio jurisprudencial fijado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del expediente 25000234100020260002000 del 28 de enero de 2026, el cual precisó que, si bien ciertos registros que se llevan en las unidades policiales tienen naturaleza pública, su contenido puede adquirir la condición de información público-reservada cuando involucra datos sensibles, estratégicos o relacionados con la seguridad institucional, los procedimientos operativos y la información de los funcionarios que hacen parte de la institución.

En consecuencia, la información relacionada con los registros internos de control, manipulación y trazabilidad del armamento institucional se encuentra amparada por las causales de reserva previstas en la Ley 1712 de 2014, particularmente aquellas orientadas a proteger la seguridad pública, la seguridad de datos personales de los servidores públicos y la integridad de los procedimientos institucionales.

Por lo anterior, no resulta procedente expedir certificación alguna en los términos solicitados en el numeral 7.

Sin perjuicio de lo anterior, se precisa que, en su calidad de víctima, el peticionario puede ejercer los derechos reconocidos en el artículo 11 de la Ley 906 de 2004 "*Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal*", entre ellos, el de acceder a la información pertinente para el esclarecimiento de los hechos y conocer la verdad de lo ocurrido, derechos que deben ser garantizados por la autoridad judicial competente en el marco del proceso penal.

Atentamente,

Teniente coronel **ELIANA CAROLINA HERNÁNDEZ SANTISTEBAN**  
Jefe Asuntos Jurídicos Policía Metropolitana de Bogotá

  
Elaboró: Abogado MANUEL HERNÁNDEZ  
MEBOG ASJUR

Revisó: SI. JEISSON DAVID SIERRA NÚÑEZ  
MEBOG ASJUR

Fecha de elaboración: 11/03/2026  
Ubicación: C://06/Mis documentos/26

Avenida la Esmeralda 22-68, 4º piso  
Teléfono: 3203023976  
mebog.coman-asjur@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

## INFORMACIÓN PÚBLICA